

ANTIDEMOCRATA

CUANDO el presidente del Gobierno, en su mensaje del día 28, inició la exposición de sus reformas, denunció a "algunos conciudadanos nuestros que parecen creerse ungidos por la democracia" por haber "propagado la especie de que el Gobierno no se ha propuesto otro fin que el dar a nuestro sistema político un tratamiento de revoco que lo haga parecer distinto y nuevo ante el exterior". La continuación de su discurso parecía dar la razón a esos conciudadanos, entre los que nosotros nos encontramos, aunque sin ninguna creencia de unción. Instantes después diría el presidente que "sólo se reforma lo que se desea conservar". Como una evocación de la vieja fórmula de que "es preciso que todo cambie para que todo siga igual". Propaguemos, pues, la especie—según la retórica del presidente— de que la supuesta reforma es un revoco conservador. No para el exterior, que no es tan fácil de convencer, y que asiste perplejo a la diferencia de propósitos que existe entre los que sustenta el ministro de Asuntos Exteriores, señor Areilza, y los que en el interior mantienen estos siempre enfadados y agresivos gobernantes que son el señor Arias y el señor Fraga.

SE ha mostrado como lo que es: un antidemócrata decidido", comentó la misma noche del mensaje uno de los más destacados derechistas del país—lo cual no le impide militar en la oposición con firmeza—, el señor Gil-Robles. Quizá sea el comentario más claro y más suficiente del discurso. Ser un antidemócrata es algo perfectamente normal en el mundo, y ha sido siempre bien recompensado en este país, donde la palabra democracia ha sufrido aún más ataques que su propio concepto, y muchos han venido del presidente del Gobierno y su familia política. Es una posición política coherente que sigue teniendo grandes teóricos, dentro y fuera. La tragedia política comienza cuando, siendo por definición, biografía y actuación un antidemócrata, alguien pretende precisamente estar ungido por la democracia, por revolver la propia frase del presidente. La promete al país—que la espera, que la desea— y trata de enunciarla. Y lo que enuncia es el revoco, la continuidad; y si fuese así, aún habría coherencia. Lo que enuncia el presidente del Gobierno es un programa temporal para unas medidas inconcretas y vagas, indefinidas. Y cuando se definen, no se sabe su alcance. Y cuando se sospecha, se teme. El señor presidente anuncia que habrá en el país dos Cámaras, como en muchas democracias occidentales. Una Cámara Alta parece ser el Consejo Nacional, rebautizado con el nombre de Senado y por los mismos sistemas de designación directa, miembros vitalicios y elección que lo componen ahora. Las Cortes recibirán el nombre de Congreso, que estará elegido por sufragio "universal, igual, directo y secreto" entre "representantes de la familia". ¿Qué alcance tiene esta frase, pronunciada levemente en el contexto del discurso? ¿Que sólo podrán ser elegidos los padres de familia, votantes exclusivos en los referéndums del régimen al que éste quiere continuar? Se sabe cuáles son las resonancias de la introducción de la palabra "familia" en política: las del corporativismo. Corporativismo es otro nombre del fascismo, según lo concibió Mussolini y fue tan ampliamente seguido. Un Con-

greso—o Cortes, o Parlamento, o Cámara Baja, o como se le quiera llamar— está formado por representantes del pueblo: de todo el pueblo. La tendencia continua en el desarrollo de la democracia es la de dar cada vez mayor amplitud a las clases electoras y a las elegibles: desde los tiempos en que elegibles eran solamente personas de una edad provechosa, una renta económica suficiente y un nivel de educación determinado se ha ido pasando a la ampliación sucesiva de todos los ciudadanos, al voto femenino, a la reducción de la edad mínima de electores y elegibles. Si la frase del presidente del Gobierno tiene una interpretación, esta es la de que hay un regreso a formas primitivas de la representatividad. El mismo regreso que emprendió el fascismo. El presidente ha omitido—y no por casualidad— la mención al papel de los partidos políticos en la elección del Congreso, y ha preferido emplear la palabra "grupos políticos". Que no se sabe lo que significa. Pretendiendo despejar las confusiones del momento actual, que naturalmente achaca a "los malos" ("... el confucionismo promovido e hinchado por gentes interesadas..."), el presidente del Gobierno arroja una confusión mayor aún en la vida política nacional. No se sabe cuáles son las relaciones entre estas dos Cámaras, ni siquiera cómo ha de ser el funcionamiento de cada una de ellas: no se sabe si del Congreso puede salir un nuevo Gobierno, si los Gobiernos serán responsables ante los diputados. No hay ninguna referencia a cómo se va a gobernar el país. En cuanto al referéndum, lo único que se sabe es que podrá celebrarse en octubre—y no ya en junio, como incluso había sido anunciado por el señor Areilza—, si el Rey lo considera conveniente. Todas nuestras reservas con respecto a ese referéndum, expresadas en el editorial del número anterior, siguen estando en pie. Sobre todo, las que se refieren a garantías de libertad de opinión y de campaña política.

RESERVAS que se multiplican ante el anuncio de las elecciones generales en los primeros meses del año 1977—lo cual es otra imprecisión grave— sin un enunciado concreto de cómo ha de funcionar la oposición y cómo será ésta tratada por la Ley Electoral que se conocerá antes del 15 de julio. La oposición ha sido considerablemente maltratada en el discurso del presidente del Gobierno. La posibilidad de lo que se ha llamado "ruptura pactada", o simplemente de colaboración de la oposición en el trazado de estas leyes, se ha esfumado con el mensaje del presidente. En cambio ha empleado éste un lenguaje duro y grave. En primer lugar, ha empleado una vez la vieja confusión entre el comunismo y la oposición. El comunismo es una parte de la oposición, y probablemente una parte menor, como podríamos saber si hubiera una real auscultación electoral de la opinión pública. La inflación del presidente del Gobierno, como la de su complementario en esta campaña política del señor Fraga, del problema comunista tiene unos motivos precisos muy políticos. Es la justificación que se dan a sí mismos de un exceso en la autoridad y en la represión. Una vieja táctica surgida también en los fascismos, explotada por el intervencionismo mundial de los Estados Unidos, nunca olvidada por quienes quieren asentar su autoritarismo sobre algo. Cualquier ciudadano que

CIA

no esté obnubilado por la propaganda y conozca la vida en torno sabe muy bien que en estos momentos de la vida nacional no hay ninguna posibilidad de acceso de un régimen comunista a España; como no la había en Portugal, y efectivamente no la ha habido a pesar de la inflación que sobre ese tema se ha hecho. Esta exageración del tema, tan arriesgada que puede estar dando motivos y justificaciones a una extrema derecha que sí que existe, que está dentro del poder y que ni está dispuesta a ser desplazada ni nadie quiere desplazarla, para mantener una posición cerrada ante cualquier reforma real, perturba toda la política nacional. Como los apelativos a la subversión, palabra no suficientemente definida. No se sabe lo que para la mentalidad del señor presidente es subversión y qué es oposición. Se sospecha que pueda ser lo mismo. Incluso no ha vacilado en atacar las alianzas de los "grupos políticos", a lo cual no tiene derecho ninguno como tal presidente del Gobierno —aunque tenga su pensamiento personal— y a anunciar el "ridículo y el olvido" para partidos que le parecen —a él— insignificantes.

EL desarrollo del tema de la subversión y los ataques a la oposición han llegado a extremos graves cuando ha juzgado la situación laboral y social, y al aludir a los luctuosos sucesos de Vitoria como fruto de una conjura extraña a los problemas sociales: "Se ha demostrado que todo estaba previsto, minuciosamente preparado, que desde fuera se habían dado todas las consignas y se había dotado con fondos de igual procedencia a los grupos extremistas con el fijado objetivo de crear un clima de confusión y temor, y hacer saltar, en el momento oportuno, la chispa de la violencia". Este mismo lenguaje truculento se aplica a los paros laborales, a las huelgas. Es cierto que es dramático para un país en tan mala situación como el nuestro dejar perder cincuenta millones de horas de trabajo en dos meses, pero es injusto atribuirlo a la "subversión" y denunciar a los trabajadores como "fuertemente presionados por quienes, como está plenamente comprobado, cobran grandes sumas por llevarles a la pobreza y a la desesperación". El señor presidente debe saber muy bien cuáles son los orígenes de la pobreza y la desesperación de los trabajadores y quiénes son los beneficiarios de las grandes sumas que se producen con esa miseria y esa desesperación. Al inclinarse en lo que son disputas entre el capital y el trabajo en contra del trabajo, el Gobierno parece aceptar una unilateralidad que sin duda corresponde a las circunstancias, pero que en cambio no corresponde a las palabras gubernamentales. La responsabilidad de las grandes empresas, el fallo de intermediario de la actual Organización Sindical y la unilateralidad del Gobierno al bloquear —finalmente, sin conseguirlo— los salarios en pleno movimiento de alza de precios no se pueden hurtar acudiendo a la leyenda de los agentes bien pagados. La falta de concreción del presidente en cuanto a la reforma sindical, con una alusión a una "amplia consulta a la base" que no se sabe cómo se va a hacer, cuándo y por quién, añade gravedad a este tratamiento del problema social. Que es uno de los más graves que tiene el país.

LA misma incomodidad produce la escucha y la lectura del párrafo dedicado a la descentralización. Al enumerar sólo unas cuantas zonas del país —"Guipúzcoa, Vizcaya, islas Canarias y región catalana"— deja a las demás discriminadas: la insistencia en llamarlas "provincias" indica ya cuál puede ser el tratamiento dado a otra de las grandes manifestaciones de urgencia del momento.

UNA prosa agresiva, áspera, un invento continuo de maniqueos, forman la envoltura de este desafortunado mensaje. Aparte de estar dando al país la sensación de una amenaza constante y continua, lejos de la pura realidad y de la relación de fuerzas, muestra un talante agresivo/defensivo que tampoco corresponde a las continuas alusiones al propio sosiego y a la calma de que el presidente hace gala al describir al Gobierno. Es un discurso desabrido para un país que no merece ese tratamiento por parte del presidente del Gobierno, y para una oposición que está haciendo gala de contención, de moderación y, ella sí, de sosiego. Ese talante del discurso se corresponde con un comportamiento diario del Gobierno con respecto a esa oposición, en lo político como en lo intelectual: un tratamiento represivo y de intención disgregadora, un continuo desprecio a lo que deberían ser sus derechos no ya políticos, sino simplemente ciudadanos, que bastaría por sí solo, sin necesidad ninguna de mensajes del presidente del Gobierno, para comprender que las reformas no son tales, y para reafirmarnos en esa clase de conciudadanos también maltratados por el presidente del Gobierno que creen que se trata sólo de un revoco de fachada. Sin efectividad alguna en el desarrollo político y social de la nación.

TODO ello no constituye ninguna sorpresa. Prácticamente bastaría con que nos remitiéramos a anteriores declaraciones del Gobierno y anteriores editoriales en esta publicación para resumir la circunstancia actual. Un antidemócrata, apoyado en antidemócratas formando un Gobierno en el que si hay algún reformista más avanzado es como excepción, y como prisionero de su compromiso y de su lealtad a la Corona, no puede traer la democracia. Ni siquiera esa democracia "a la española", definición inane que no puede sustituir a la idea prevaleciente de una democracia doméstica: domesticada. Una vez más, el presidente del Gobierno ha producido la consternación y la decepción entre los que aún esperaban algo, y la confirmación en aquellos que ya sabíamos que con esta formación ministerial no hay posibilidad alguna de dar los pasos adelante propuestos por el Rey en sus declaraciones iniciales. Pero ese paso atrás no hace más que dificultar la situación general del país, que requiere actitudes conformes a la dinámica de la vida que se va desarrollando. La urgencia no está sólo en modificar los procedimientos de las actuales Cortes ni en indicar un calendario: está en la modificación profunda de las estructuras administrativas del país, que tienen que ser hechas, por las circunstancias históricas, desde la Corona, y con la ayuda de un Gobierno penetrado de esa necesidad, no por uno que sólo quiere sostener en pie lo que ya ha caducado, disfrazándolo de fundamental. ■